

¿Cuáles son los cambios respecto a la cultura política de México en 2018?*

XXIX Congreso SOMEE, Balance de los procesos electorales 2017-2018. Monterrey, 6 al 9 de noviembre de 2018

JAIME CASTILLO PALMA**

drjaime105@hotmail.com

Considerando que la dirección de la SOMEE insiste en que analicemos los efectos de la reforma electoral del 2014 en las elecciones del 2018, cabe replicar que las reformas político electorales no necesariamente trascienden en lo referente a las usuales y nuevas prácticas culturales político electorales, ni resultan un aporte significativo en la construcción de la ciudadanía. Por el contrario, resulta pertinente cuestionar cómo, a pesar de la gran cantidad de reformas electorales que permitieron constituir nuestro agotado sistema político, persisten rasgos indeseados tales como su disfuncionalidad, su creciente costo, su constante pérdida de legitimidad y su pésimo desempeño.

La idea fuerza de mi ponencia sustenta que la cultura política imperante se acomodó a los cambios económicos, políticos y sociales impuestos por el neoliberalismo (desde Carlos Salinas hasta su *retour en force* neoliberal con Enrique Peña). Me refiero a los intereses en juego ligados a la forma como se fue constituyendo la legislación político electoral, desde la creación del IFE, el actual sistema de partidos, la percepción de prerrogativas, el acceso a los medios de comunicación, el financiamiento electoral, los árbitros electorales, el sistema nacional de elecciones con el INE, la fiscalización del financiamiento electoral, los procedimientos sancionadores, etcétera. De modo que en cada coyuntura fueron emergiendo prácticas culturales político electorales resultantes de la correlación de fuerzas que permitirían explicar cuándo son causa o efecto de los conflictos vividos y razón de ser del constante cambio a la legislación político electoral para tratar de contenerlos.

* Este trabajo no hubiera sido posible sin la invaluable colaboración de Angelina del Carmen Flores Vargas y Alejandra Valencia Serrano quienes, bajo mi dirección, realizaron las bases de datos e hicieron los documentos de síntesis en los que se basa este texto y su organización. La corrección de estilo estuvo a cargo de Angelina del Carmen Flores Vargas.

** Universidad Autónoma de Puebla.

1 Gobierno de la República. Pacto por México. Recuperado de <http://www.presidencia.gob.mx/wp->

En cada una de las coyunturas político electorales emergió una cultura política que arranca con el agotamiento del partido hegemónico, dando paso a la alternancia y a un período de corrupción, impunidad y violencia imparables, siendo algunos de sus rasgos principales:

- la simulación mediante prácticas patrimoniales, autoritarias y discrecionales en la creación de partidos políticos, dada la compulsiva intención para pasar de un partido hegemónico a un sistema de partidos, dándole prioridad y exclusividad en todos los órdenes y restringiendo a este, los espacios de la participación política. Terminó funcionando como modelo de franquicias que, mediante cuotas, determinaba la composición del árbitro electoral;
- la elección de candidatos mediante el cultivo de la imagen dio paso preponderante a las empresas de los medios de comunicación, sustituyendo la ideología por el uso de la mercadotecnia electoral; obviamente, sin dejar de lado la reedición de viejas prácticas en el reclutamiento de las bases sociales de votantes mediante el clientelismo, el corporativismo y la obtención de escaños a través de la compra y la coacción del voto;
- la relación entre el poder y los negocios que pervirtió a la política y a la democracia al usar las privatizaciones y concesiones en todo lo que pudiera representar un negocio para impulsar las carreras políticas de los gobernantes. La práctica de reproducción de la clase política resultó rentable para los poderes fácticos, — incluido el crimen organizado— y explicaría la violencia, los asesinatos y sinnúmero de conflictos sociales con evidentes repercusiones electorales.

De aquí que las reformas electorales no sean suficientes para hacer un balance de los procesos electorales, mucho menos en los comicios del 2018; pero, conducen ineludiblemente a preguntarse centralmente: ¿Cuáles son los cambios respecto a la cultura política de México en 2018?

Para responder a esa pregunta, esta ponencia aborda tres aspectos que resultan torales para realizar un balance del proceso electoral de 2018 referente a las prácticas culturales político electorales. En principio, destacar la pertinencia de una visión de conjunto del sistema

político y no sólo del régimen político. Enseguida, reconsiderar los efectos del contexto socio político y económico como factores preponderantes en el origen de los resultados electorales en el 2018. En fin, destacar los rasgos sobresalientes en el uso de las nuevas y viejas prácticas culturales político electorales.

En la primera parte se aborda el balance electoral del 2018 desde el análisis del contexto del sistema político, considerando que abarca tanto al conjunto de instituciones, como a los procesos políticos y las interacciones de los distintos actores en el espacio público. Esto en contraposición al análisis sugerido reducido al régimen político, centrado sólo en las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio de este, de donde, desde luego, emanan las reformas electorales (Barbé, 2017: 159-160).

La segunda parte aborda causas y consecuencias de las promesas de campaña *versus* las acciones de gobierno, así como las prácticas culturales político electorales que condujeron al realineamiento de actores y grupos sociales que lograron el voto masivo contra quienes detentaron el poder en los últimos 32 años; mismos que se caracterizaron por la aplicación de políticas neoliberales determinadas por la incesante corrupción, autoritarismo, violencia, impunidad y corrupción.

En fin, la tercera parte se centra en hacer un balance de las usuales y nuevas prácticas culturales político electorales en los comicios de 2018 para, finalmente, abordar a manera de conclusión el balance.

1. Contexto del origen del voto opositor

La acumulación del descontento social, el hartazgo y la desconfianza contra el gobierno y los partidos políticos que impusieron las políticas neoliberales, son producto del impacto que han tenido dichas políticas en el empobrecimiento y en el deterioro de las condiciones de vida y laborales de la gran mayoría de la población.

Asimismo, las discrepancias entre las promesas electorales y las acciones de gobierno, luego de la alternancia en la Presidencia de la República (PAN, 2000) coadyuvaron al

desencanto y la desconfianza, generando una percepción de inseguridad ante el aumento de la violencia, la corrupción y la impunidad. Desencanto y desconfianza que se vieran incrementadas durante el segundo período del PAN (2006-2012) en la Presidencia de la República, por la declaración de guerra al narcotráfico, declaración que, por cierto, no fue referida durante la campaña electoral de Felipe Calderón, empero expresó la búsqueda de legitimación de su muy cuestionado triunfo electoral.

En fin, el regreso del PRI a la Presidencia de la República empeoró la situación en todos sentidos, debido al proceder autoritario y antidemocrático con el que fueron impuestas las llamadas reformas estructurales del Pacto por México (2012)¹ entre los dirigentes del PRI, PAN y PRD.

Las consecuencias fallidas del Pacto privatizador que impactaron en el bolsillo del electorado no sólo marcaron el segundo descarrilamiento del neoliberalismo mexicano, sino también el repunte de la corrupción y la impunidad. Destaca la simulación democrática en el ejercicio gubernamental para dar viabilidad a privatizaciones y concesiones de las que dependen las carreras políticas y las ganancias de los actores involucrados (Castillo, 2016), que condujo a una relación perversa entre el poder y los negocios al imponerse en los procesos de privatización de las obras y los servicios públicos el modelo de participación público-privada; una forma pecuniaria de reproducción de la clase política para garantizar negocios rentables. De aquí que sea común la sumisión de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo y la designación de autoridades por consigna, cuotas y corruptelas; incumpliendo los preceptos de la democracia liberal y violando constantemente los derechos humanos, laborales y políticos, generando así una mayor debilidad del Estado.

La impunidad dio paso a la diseminación nacional del incremento de crímenes dolosos y del orden común², al robo de combustibles, al robo al transporte ferroviario y de carga y, peor aún, permitió la infiltración del crimen organizado en los diferentes niveles de gobierno.

1 Gobierno de la República. Pacto por México. Recuperado de <http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf>

2 Cfr. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018.

Durante la administración de Peña Nieto, los datos macroeconómicos son elocuentes respecto al contexto del malestar social ocasionado por el aumento de la deuda (69.7%), la depreciación del peso (51.6%), la inflación (6.77%) y un crecimiento promedio del PIB del 2.17% para el periodo de 2013 a 2017³, por debajo del 6% prometido en su campaña electoral de 2012.

Por lo tanto, coadyuvan al malestar, hartazgo y desconfianza: “la visibilización pública de la corrupción en la política, el miedo existente en la población por la ola de violencia e inseguridad nacional, el precario crecimiento económico que se refleja en la poca oportunidad laboral que tienen actualmente los jóvenes, y la desigualdad que marca las relaciones sociales en nuestro país” (Woldenberg, 2018).

Al respecto, algunos datos relevantes muestran que el desbordamiento de la corrupción e impunidad en los últimos años: de dieciséis ex gobernantes investigados por delitos que van desde la corrupción hasta nexos con el narcotráfico, nueve concluyeron sus funciones durante la administración de Peña Nieto⁴. Según la ONG Transparencia Internacional, México ocupó en 2017, el lugar 135 de 180 países evaluados de acuerdo con sus índices de corrupción, una caída de 30 lugares con respecto a la posición ocupada en el año 2012⁵.

La promesa de Peña Nieto de “alcanzar un México en paz” y parar la guerra iniciada por su antecesor formó parte de sus discursos de campaña para acceder al poder, de allí la

3 Cfr. Mendoza, Viridiana (2018). 2018 podría ser un año traumático para la economía mexicana en Forbes, 11 de abril de 2018. Recuperado el 15 de agosto de 2018 de <https://www.forbes.com.mx/2018-podria-ser-un-ano-traumatico-para-la-economia-mexicana/>

4 Se tiene registro de cinco exgobernadores encarcelados en México, Javier Duarte (PRI, Veracruz), Guillermo Padrés (PAN, Sonora), Jesús Reyna García (PRI, Michoacán), Andrés Granier (PRI, Tabasco) y Roberto Borge (PRI, Quintana Roo); dos apresados en el extranjero y extraditados a Estados Unidos: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (ambos, PRI, Tamaulipas). Tres están sujetos a proceso en libertad: Flavino Ríos (PRI, ex gobernador interino de Veracruz), Rodrigo Medina (PRI, Nuevo León) y Luis Armando Reynoso Femat (PAN, Aguascalientes). Cuatro sólo fueron investigados: Fidel Herrera Beltrán (PRI, Veracruz), Gabino Cue (Oaxaca), Pablo Salazar (PRD, Chiapas) y Humberto Moreira (PRI, Coahuila, investigado en el extranjero,) y dos más están prófugos, Cesar Duarte (PRI, Chihuahua) y Jorge Torres López (PRI, Coahuila). Cfr. El País. La corrupción de los gobernadores sacude México y cerca a Peña Nieto. 12 de abril de 2017. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/04/11/mexico/1491939865_555849.html

5 Transparencia Internacional. Índice de percepción de corrupción, Año 2017. Disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#

inclusión en el Eje Tres del Pacto por México, como uno de los objetivos principales, la recuperación de la paz y la libertad mediante la disminución de la violencia. Sin embargo, la estrategia de seguridad que incluía el objetivo no alteró la inercia que ya se expresaba desde 2006, muy por el contrario, la incrementó⁶ y la dispersó⁷.

Sobre impunidad y procuración de justicia, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2018), revela que sólo se denuncia el 10.4% del total de delitos y se abre averiguación previa al 65.3% de los casos denunciados. Para abonar a lo anterior, el Instituto Belisario Domínguez señala que desde la aplicación de la ENVIPE 2014 era conocida la poca confianza de la población en el aparato de procuración de justicia: 38.1% le tenía poca confianza y 18.1% no confiaba en esa autoridad (Echarri, 2017:48). Otro dato que revela la desconfianza en este mismo aparato es el recrudecimiento de los casos de justicia por propia mano, que alude a los linchamientos consumados y en tentativa: 6 identificados en 1988, alcanzando su máximo en 2010 con 49, hasta sumar 29 tan sólo para el primer cuatrimestre del 2014 (Rodríguez y Veloz, 2015: 53), reflejo del desbordamiento de la violencia colectiva ante la incapacidad de las autoridades de actuar, efecto que el nuevo Sistema de Justicia Penal (2016) no ha podido detener.

La intención de acabar con la pobreza (Compromiso 6 del Pacto por México), mediante la fallida eliminación de su sesgo asistencial y uso electoral, tampoco fue cumplida: según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2014) el total de pobres se mantuvo⁸, pasó de 53.3 millones en 2012 con Calderón, a 53.4 millones en 2016. Aunado a esto, la disparidad entre el incremento del costo de la canasta básica (\$27.2), respecto al aprobado para el salario mínimo (tan sólo \$7.0), expresa la

6 Cfr. “INEGI: homicidios en México registraron récord en 2017” en El Universal, 31 de julio de 2018. Recuperado de <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/rompe-2017-record-en-asesinatos-con-31-mil-174>

7 Cfr. Ángel, Arturo. 2018. “Los homicidios aumentan en 18 estados; hay incrementos de hasta 300%”, Animal político, 23 de julio de 2018. Recuperado el 24 de agosto de 2018 en: <https://www.animalpolitico.com/2018/07/homicidios-aumento-estados/>

8 Cfr. La pobreza y el Gasto Social en México, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de diputados, 2015. Recuperado el 10 de agosto de 2018 de: <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/2015/precefp0042015.pdf>

pérdida del poder adquisitivo que, para los últimos treinta años acumula 80%⁹. Así mismo, la creación de nuevos empleos tampoco refleja mejorías, según Forbes, “de los 3.4 millones de empleos creados entre 2012 y 2017 reportados por el IMSS, 2.6 millones, es decir el 74%, fueron empleos que perciben entre uno y dos salarios mínimos”¹⁰. De modo que las mejoras que traerían las reformas estructurales privatizadoras no alcanzaron a la gran mayoría de la población. Cuestiones que muestran la envergadura del segundo descarrilamiento neoliberal que explicaría el contexto del descontento social como uno de los principales efectos del voto opositor en el 2018.

Veamos ahora, de manera específica, el modo en el que las contradicciones de las promesas de campaña y las acciones de gobierno determinan un reagrupamiento de los actores políticos y sociales e influyen en la percepción generalizada de rechazo y hartazgo. Percepción que se constituyó en el eje del discurso de la oposición que ganó por abrumadora mayoría, denunciando el autoritarismo, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad como resultado de una “mafia del poder” con intereses pecuniarios. Abordaremos entonces, las acciones de gobierno que determinaron el reagrupamiento de los actores políticos y sociales en torno a los candidatos, así como los efectos que tuvieron en la percepción de rechazo y hartazgo social.

2. Acciones de gobierno que pegaron en el bolsillo y percepción del electorado

Las promesas durante la presidencia de Peña Nieto preconizaban las múltiples ventajas de las privatizaciones, pusieron el énfasis en la obtención de mejores servicios a precios mucho más económicos y mejores expectativas de desarrollo para el país. Contradictoriamente al discurso de campaña electoral, se registró sinnúmero de acciones de gobierno que impusieron incrementos provocados por las privatizaciones: la gasolina¹¹, el

9 Cfr. UNAM. 2018. “La pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos 30 años es de 80 por ciento: expertos de la UNAM”. Boletín UNAM-DGCS-016. Ciudad Universitaria. 12 de enero de 2018. Recuperado de: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/20z8_016.html

10 Forbes. “2012-2018, el sexenio del empleo (mal pagado)”, 6 de abril de 2018. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/2012-2018-el-sexenio-del-empleo-mal-pagado/>

11 Un ejemplo relevante y de enorme repercusión es la disminución de los precios de la gasolina en los Estados Unidos en 33% en los últimos seis años mientras que, en México, durante el mismo período, acumuló un alza de 64%. Cfr. Justin Fox. The Strange Case of Mexico's High Gasoline Prices, 20 de Abril de 2018. Consultado en: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-04-20/mexico-s-high-gasoline-prices-don-t-make-a-lot-of-sense>

gas, el agua, peajes, impuestos, etcétera. A la par, las concesiones y privatizaciones afectaron a poblaciones en donde se impusieron los llamados “proyectos de muerte” (la industria extractiva depredadora o minería a cielo abierto, infraestructura carretera operada por concesión, el *fracking* y los ductos para la conducción de gas, la construcción de hidroeléctricas, la del nuevo aeropuerto, etcétera) que, con apoyo gubernamental, disputaron a los habitantes el uso de la tierra y el agua. La reforma educativa con énfasis en su alcance laboral y administrativo también generó una imparable oposición al gobierno, en la voz del magisterio.

Otras disputas por tierra para la producción de enervantes y las plazas para su comercialización provocaron la diseminación de la violencia mediante enfrentamientos, ya entre cárteles o de cárteles contra el ejército —metido a labores policíacas—. Al mismo tiempo, crecían los giros de acción criminal: el llamado “pago de piso”, los secuestros, el robo de combustibles de los ductos de PEMEX (o “huachicol”), el robo al transporte ferroviario y el transporte de carga; todos, involucrando a autoridades federales, estatales y municipales. Este fenómeno de desorganización y desorden, caracterizado por Émile Durkheim como anomia (López, 2009) alentó también el aumento del robo común con violencia, los feminicidios, los asesinatos de periodistas e incluso, la violencia doméstica.

Todo esto coadyuvó a una reacción social de la que emergieron movimientos sociales y actores de toda índole en contra de los efectos de la privatización en todas sus modalidades: contra los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas cometidas por los cárteles del narco¹², contra la delincuencia común y la pérdida del espacio público, etc. Esta actitud resiliente dio paso al realineamiento de bases sociales no identificadas con el clientelismo y el corporativismo gubernamental como activos opositores de los partidos políticos identificados con el pacto privatizador; cuya participación electoral rebasó con creces la capacidad de compra y coacción del voto, las campañas negras, la mercadotecnia electoral, etcétera.

12 El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el período que va de enero de 2007 al 30 de abril de 2018, suma 36,265 personas. Cfr. <http://secretariadodejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php>

Pero, lo más importante a preguntarse en adelante es el modo en el que la percepción del electorado se constituyó en discurso y éste en práctica política. A la luz de los aportes de Héctor Tejera Gaona (2009), buscamos aquí el afán de los actores políticos y sociales para cuestionar o reforzar los significados culturales dominantes y la forma como se concretan a través de sus prácticas político-culturales, en cuanto a intencionalidad, acción y contexto en el marco de la pugna político electoral.

Vale recordar que, durante los últimos cinco procesos electorales presidenciales, correspondientes al marco de la primera y segunda oleadas neoliberales, encontramos una pugna discursiva entre los candidatos contendientes, vinculada regularmente a la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, la violencia y, principalmente, al fraude electoral. Fraudes que han ocasionado movilizaciones masivas de la oposición, la pérdida de confianza y de legitimidad hacia los declarados ganadores. Durante estos procesos electorales se combinaron diferentes significados culturales dominantes, prolongándose hasta el correspondiente a 2018 en contra de quienes se opusieran a un neoliberalismo, dado que, en términos económicos y políticos se estaba apostando todo a la economía de mercado y a la simulación democrática.

Para el caso de la elección del 2018 destacan un par de aspectos que reforzaron la percepción de significados dominantes:

El primero alude a las similitudes discursivas de los partidos firmantes del pacto por México (no obstante, sus desencuentros), me refiero a:

- a) la exacerbación de las acciones gubernamentales en las campañas electorales a pesar de ser origen de sinnúmero de conflictos sociales;
- b) la propagación del “discurso antipopulista” centrado en el *spot marketing*, las llamadas propagandísticas desde *call centers* y el uso de los medios masivos de comunicación audiovisual y de prensa escrita vinculada al control gubernamental;
- c) la exaltación de las obras y servicios públicos surgidos de la relación entre poder y negocio;

- d) la denostación de los adversarios políticos mediante campañas negras y uso faccioso de las instituciones del Estado;
- e) la negación sistemática del ilegal financiamiento electoral mediante el desvío de recursos públicos y/o las contribuciones ilegales provenientes, incluso, del crimen organizado;
- f) la omisión de la ley ante decisiones de los árbitros electorales para rechazar o aceptar candidatos independientes¹³;
- g) la utilización de la demoscopia, revestida como instrumento de manipulación, toda vez que las estimaciones daban amplio margen de ventaja al contendiente opositor al neoliberalismo. Estas cuestiones en conjunto, coadyuvaron a potenciar la percepción de que las elecciones se perfilaban hacia un nuevo fraude electoral y a la prosecución de las privatizaciones.

El segundo aspecto destaca el aprendizaje de veinte años de campaña opositora de quien fue elegido en 2018: agravios, fraudes e inequidad electoral fueron aprovechados, entre otros aspectos, hacia dos cuestiones que impactaron en la percepción del electorado:

- a) Por un lado, no interponiéndose en la ruptura entre PRI y PAN, expresada notoriamente en el uso mediático de la PGR para denostar al candidato del PAN con sobreentendidas intenciones de equilibrar el porcentaje de intención de voto en favor del candidato del PRI y,
- b) por otro, difundiendo a través de medios de comunicación tradicionales, redes sociales, activismo casa por casa y constantes recorridos del candidato por todo el país; un discurso político identificado con el descontento y la desconfianza popular debidos a las alzas en el costo de productos y servicios de Estado, empero, referido también a un cambio con base en la esperanza y concordia¹⁴.

Veamos entonces la forma como se concretaron las prácticas político-culturales en cuanto a intencionalidad, acción y contexto; en el marco de la pugna político electoral, con el

13 Como fue el caso de la representante del Consejo Nacional Indígena o la aceptación de quienes habían cometido fraude para obtener su registro.

14 Cfr. Rodríguez, Arturo. 2018. Antonio Solá: AMLO ganará porque capitaliza la ira social, Proceso, 24 de marzo de 2018, México. Recuperado el 22 de agosto de 2017 de:
<https://www.proceso.com.mx/527389/antonio-sola-amlo-ganara-porque-capitaliza-la-ira-social>

propósito de hacer un balance que permita discernir cuáles serían los cambios en la cultura política.

3. ¿Hay cambios en las prácticas culturales político electorales en el 2018?

Abordado el contexto y la percepción social en las elecciones concurrentes del 2018, encontramos cierto encadenamiento de prácticas político electorales de las que sólo haremos referencia en sus aspectos y actores relevantes. En principio, nos vamos a referir a las prácticas que remiten a las condiciones para acceder a la candidatura al interior de los partidos. Luego, al montaje de prácticas mediante las cuales se trató de asegurar la operación electoral en cuanto a las alianzas con diferentes actores políticos y sociales y con los partidos satelitales con quienes se formaron las coaliciones. Enseguida, las que remiten a la selección de los candidatos surgidos de los actores políticos y sociales involucrados, además a las prácticas que refieren al cuidado de los comicios y a su calificación. Por último, hacemos mención de la violencia en el marco del proceso electoral, en tanto nueva práctica política.

En el marco de la pugna electoral para conseguir el apoyo partidario encaminado a obtener la designación de la candidatura presidencial encontramos a las usuales prácticas político culturales:

- Es el caso de la tercera nominación de AMLO, ganador de la elección del 2018, quien al no tener una correlación de fuerzas favorable recurrió a la ruptura con el PRD —toda vez que su dirigencia había reconocido el triunfo de Peña Nieto y firmado el Pacto por México— y luego dio paso a la creación de MORENA para asegurar su candidatura, de la misma forma como se originaron entre 1977 y 2005, los cinco partidos fundados por expriistas: como resultado de defecciones y escisiones (Castillo, 2013).
- En tanto, en el PRI encontramos la práctica del *dedazo* o del gran elector en la persona del Presidente Enrique Peña, quien incluso reformó los estatutos del partido, para imponer a José Antonio Meade. Así fue como un expanista y funcionario del núcleo duro de su gobierno fue presentado como candidato independiente, eficiente y no priista, para aparentar una imagen ciudadana y diluir así la percepción de corrupción que pesaba sobre él y sobre el PRI. Sin embargo, ese imaginario de mercadotecnia electoral causó el

alejamiento de los militantes del PRI. El candidato resultó impopular y alejado del partido que pretendía representar quedando exhibido el distanciamiento entre dirección, bases y operadores.

- Los casos del PAN y del PRD remiten a una práctica en donde se disputa la dirección del partido con la intención de promover la candidatura principal o presidencial de quienes detentaban su representación: Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Esta práctica ocasionó pugnas, rupturas y defecciones con otros aspirantes, como Gustavo Madero, Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, etc. La disputa culmina con la defección de Zavala para contender como candidata independiente y la nominación de Anaya como candidato de la coalición con PRD y MC liderada por el PAN y la de Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno de la ciudad de México por las mismas siglas.

El montaje de prácticas para lograr las alianzas que aseguraran la operación electoral condujo a todos los partidos por el pragmatismo político electoral, tanto para atraer actores políticos y sociales a modo de operadores a cambio de curules o puestos, como para usar a los pequeños partidos satelitales —cuando ya no resulta necesaria la coincidencia ideológica o programática— para constituir coaliciones por razones funcionales¹⁵, caracterizadas por estar lideradas por un partido grande, operar como franquicias políticas mediante cuotas concertadas para obtener prerrogativas, representación proporcional y conservar el registro electoral a cambio de porcentajes mínimos de votación (útil en resultados cerrados) así como por albergar candidaturas ajenas de representación proporcional. Por tanto, luego de los resultados electorales, la conformación de los partidos satelitales ha cambiado de lugar, mas no de función: continuar con la simulación democrática al servicio del mejor postor¹⁶.

15 La efectividad de las coaliciones se manifiesta en su incremento, si consideramos aquellas que ganaron gubernaturas suman dos en el año 2000, dieciséis en 2006, veintisiete en 2012 y veintiséis en 2017 (Castillo, 2012, datos actualizados al 2017).

16 En el 2018 contendieron nueve partidos en tres coaliciones lideradas por MORENA, PAN y PRI. los porcentajes obtenidos permiten deducir una nueva conformación: un partido grande (MORENA 37%), dos intermedios (PAN 17.93% y PRI 16.53%) cuatro pequeños o satelitales (PRD 5.27%, PVEM 4.78%, MC 4.41% y PT 3.92%) y dos de ellos perdieron su registro (PANAL 2.47% y PES 2.40%) clasificándose como partidos no competitivos. (Navarrete y Espinosa, 2017: 73).

- El PRI, estableció la coalición *Todos por México* con sus ya habituales franquicias satelitales: PVEM y PANAL. Conformó sus bases de apoyo electoral mediante el uso del clientelismo, el corporativismo y el apoyo del empresariado involucrado en la relación poder-negocios y de los poderes fácticos que controlan los medios de comunicación. Entre los sectores corporativos destacó la participación de organizaciones de amplia cobertura nacional como la Confederación Nacional Campesina, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Antorcha Campesina para garantizar la propagación del discurso de campaña de su candidato y hacer shows de masas complementados con el tradicional acarreo. Además, echó mano de la práctica de la campaña negra y propagó el discurso del miedo con el uso de *bots trolls*, redes sociales, *call centers* y medios tradicionales. No obstante, el candidato ciudadano no lograba sobrepasar el descrédito del PRI, ni tampoco conectar con sus bases de apoyo; su discurso se centraba en la campaña de miedo y la denostación de AMLO.
- MORENA estableció su coalición luego de varios llamados a los plausibles partidos de izquierda PRD, PT y MC en el contexto de la pugna electoral por la gubernatura del estado de México (2017). La coalición *Juntos Haremos Historia* quedó integrada por MORENA, PT y PES. El montaje de la operación electoral comenzó mucho antes de la ruptura entre AMLO y PRD: algunos operadores políticos de AMLO fungieron como diputados o senadores, ya sea en el PRD o en el PT, hasta que MORENA obtuvo su registro o hasta concluir su periodo en las Cámaras. Obtenido el registro, el nuevo partido elige a AMLO para presidir el Comité Ejecutivo, dando paso a la práctica política del uso de la dirección del partido para promover su candidatura a la presidencia, para dotar de recursos a su campaña, para organizar a sus bases sociales y para definir sus políticas de gobierno. En este punto confluyen distintas prácticas políticas alrededor del consabido pragmatismo político, luego de dos derrotas consecutivas. De modo que se busca reafirmar la percepción de pluralidad democrática mediante la presentación en mítines políticos de cuestionados personajes provenientes de distintos partidos, sindicatos y movimientos, como adherentes a la campaña electoral de AMLO, para la búsqueda de mayor número de votantes, para reafirmar en el imaginario colectivo el discurso de pacificación,

esperanza y concordia; para esbozar promesas de campaña contra la corrupción y el dispendio (que le valieron la empatía y apoyo de los simpatizantes de la esperanza); y, mediante la promesa electoral de acoger sus demandas, para reafirmar la participación de los actores y las bases de movimientos sociales y políticos agraviados por los efectos del pacto privatizador. En la operación electoral, el pragmatismo político consistió en reclutar a plausibles candidatos (al Senado, a diputaciones y a cargos en el futuro gabinete) con perfiles heterogéneos, lo que provocó un vuelco a la campaña pues se trataba de dirigentes y exdirigentes surgidos del corporativismo, activistas sociales recién excarcelados o perseguidos, exfuncionarios jubilados, líderes del empresariado, incluso gobernadores, alcaldes y políticos en funciones en pugna velada al interior del PRI, PAN, PRD o MC¹⁷. Todo esto —debemos suponer— mediado por el interés recíproco y soterrado de los involucrados de alcanzar la asignación de candidaturas o puestos públicos a cambio del apoyo para la construcción del programa de gobierno o bien, de experiencia y estructura para la operación en los comicios electorales¹⁸. A lo anterior hay que sumar las declaraciones de AMLO sobre los intereses en juego en la elección, que lo llevaron a definir la agenda de los medios masivos de comunicación en plena campaña electoral.

- La coalición liderada por el PAN con PRD y MC denominada *Por México al Frente* fue producto de un proceso conflictivo, tanto al interior del PAN como del PRD, pese a tener antecedentes locales del pragmatismo con fines electorales. Para la conformación de la alianza, Anaya tenía consenso¹⁹, eso le permitió no sólo crear una percepción favorable a la coalición electoral entre la derecha y la izquierda, sino también exaltar su imagen al ser Presidente del PAN y a la vez, candidato embozado

17 Cfr. Argumedo, Ávila y Mota. 2018. VerificadoMX: Ningún partido se salva, todos tienen a expriistas entre sus candidatos, Animal Político, 5 de junio de 2018. Recuperado el 14 de agosto de 2018 de: <https://www.animalpolitico.com/2018/06/verificado-partidos-expriistas/>

18 A medida que avanzaba la campaña se dieron más adhesiones, las relacionadas con la estructura comicial se constatan con el aumento en la cobertura de casillas por representantes de MORENA que fue de 99%, cifra que ni PRI ni PAN lograron alcanzar. Cfr. “Cobertura casi total de MORENA, INE: registro inédito de 2.6 millones de representantes de partidos en casillas” en La Jornada, 20 de junio de 2018. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2018/06/20/politica/012n1pol>

19 Como presidente del partido, había ganado siete de trece gubernaturas disputadas en el año 2016, cuatro en alianza con PRD.

a la presidencia²⁰. En el PRD la dirigente Alejandra Barrales, por el contrario, acusada de corrupción e incongruencia ideológica, logró negociar la candidatura presidencial de Miguel Mancera a cambio de la suya para la jefatura de la Ciudad de México. Las bases sociales que apoyaron a esta coalición provenían del clientelismo del PRD (identificadas con sectores medios, católicos, conservadores) y de personalidades independientes que apoyaban la idea de desmarcarse del PRI mediante la denuncia contra la corrupción. El montaje de su operación electoral enfrentaba sinnúmero de adversarios agraviados por la meteórica forma como hizo su llegada a la dirección del PAN y a la candidatura de la coalición Ricardo Anaya: mediante enfrentamientos faccionales intra partidarios con Margarita Zavala, (primero por la dirección del partido²¹, luego por la candidatura a la presidencia; le valió la ruptura con el grupo del expresidente Felipe Calderón) y con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle²², (pugna saldada al pactar la candidatura de Martha Erika Alonso —esposa de Moreno Valle— a la gubernatura de Puebla por la coalición); se enfrentó con Miguel Ángel Mancera, Jefe de gobierno de la Ciudad de México (PRD) para acceder a la candidatura presidencial del Frente²³. En el marco de la campaña electoral, la plataforma de la coalición y los encargados de la operación electoral, independientes en su mayoría, quedaron alejados de las bases del panismo tradicional. Durante la campaña, el candidato se posiciona en segundo lugar, centrándose en una campaña negra de denostación directa contra AMLO, cuidando no descalificar las reformas del Pacto por México que él mismo había promovido. En el electorado, sin embargo, se refrendó la percepción de connivencia entre PRI y PAN, conocida como PRIAN, la cual no cambió ni por la campaña negra emprendida por el PRI contra Anaya²⁴ con la facciosa

20 La hilvanada de triunfos se detiene en las elecciones de 2017, cuando de tres gubernaturas disputadas el PAN gana dos, de las cuales le desconocen una para favorecer al PRI, dando paso a más enconos previos a las elecciones presidenciales del 2018.

21 Zavala buscaba la dirección del partido desde 2015 para reconstruir al panismo cooptado por el grupo de Madero, del que Anaya era operador.

22 Quien intentó constituir una coalición con el PRD, liderada por el PAN para postularse como candidato presidencial.

23 Convino con los líderes de PRD y MC que la militancia panista elegiría al candidato del frente, cediendo a cambio, la candidatura a la jefatura de gobierno a la, entonces presidente del PRD, Alejandra Barrales.

24 El candidato enfrentará acusaciones de lavado de dinero que suben de tono hasta intervenir la PGR. Intervención que buscaba denostar al panista para equilibrar la debilidad del candidato de PRI, Anaya responde amenazando con enjuiciar a Peña Nieto por corrupción, en caso de ganar la contienda electoral.

intervención de la PGR; pues se mantenían sus coincidencias neoliberales por las que calificaban al candidato opositor como populista, antisistema y un peligro para México; mas con la campaña se frena las preferencias electorales a su favor. A partir de esto, el discurso de campaña se alejó de la plataforma electoral establecida y se tornó en contra del Presidente Peña Nieto, amenazándole con impulsar una comisión de la verdad para procesarlo por actos de corrupción, en caso de ganar la contienda electoral.

En fin, por lo que se refiere a las nuevas prácticas de la cultura política, destacan los efectos del aumento de la violencia ocasionados por la delincuencia organizada (mafias, narcotráfico, robo de combustibles, etcétera), las privatizaciones y concesiones surgidas de la relación poder-negocios, cobijadas por el neoliberalismo. Baste mencionar el incremento constante en el número de denuncias por homicidios dolosos²⁵. Particularmente, en lo concerniente a los procesos político electorales destacan, desde 2005, los llamados de atención por parte de Asociaciones de alcaldes a las autoridades estatales y federales debidos a la inseguridad y violencia padecida por sus agremiados. Sin embargo, la falta de apoyo y la consecuente impunidad han propiciado una tendencia creciente de asesinatos de autoridades electas (salientes y entrantes), funcionarios, militantes partidarios y activistas sociales, que alcanza los 301 asesinados en el período 2005-2018²⁶. Cifra que nos permite identificar el surgimiento de la cultura política de la violencia; lo cual no resulta sorprendente si tomamos en cuenta que 156 asesinatos (el 51.8%) corresponden al periodo que va del 8 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018 en el que se inserta el proceso político-electoral 2017-2018; con las siguientes características:

- Los asesinatos de quienes salían o aspiraban a un cargo de elección popular se concentran en 132 municipios, el 80% de estos se ubica en nueve entidades: Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, México, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas.

25 A partir de la alternancia, los máximos por cada sexenio corresponden a 2001 con 10,855 (V. Fox), 2011 con 22,409 (F. Calderón) y 25,339 en 2017 -sin contar lo que sume 2018- para E. Peña. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018: ibid)

26 Según base de datos de elaboración propia a partir de fuentes hemerográficas.

- En las entidades federativas arriba mencionadas se encuentran operando ocho cárteles del narcotráfico²⁷, bandas dedicadas al robo de combustible y células derivadas de cárteles que aprovechan las poblaciones empobrecidas para involucrarles en sus actividades ilícitas, presionando e infiltrando a las autoridades locales de dichos municipios.
- En un porcentaje de 65.2%, se trata de municipios con menos de 45 mil habitantes; y el 69.7% alcanza índices de marginación media, alta y muy alta.
- Estos municipios forman parte de zonas o regiones en donde también confluyen conflictos sociales surgidos por la disputa del agua, la tierra, la contaminación del medio ambiente²⁸, y la imposición de megaproyectos;
- En cuanto a los asesinatos, el 63% de los casos, se trató de ejecuciones sólo posibles de realizar por el crimen organizado, en su afán de controlar el territorio para imponer sus intereses.
- De acuerdo con la militancia de las víctimas y según las coaliciones contendientes en las elecciones de 2018 (la liderada por PRI 34.6%, PAN 34.6% y MORENA 19.9%), no se manifiesta tendencia partidaria; por lo que se podría considerar que los crímenes están más ligados a la disputa entre la delincuencia organizada por el control territorial, a través de quien detenta el cargo de la institución municipal.
- Esto porque, si atendemos al momento electoral en el que ocurrieron los asesinatos, el 50.6% se concentra al inicio del proceso (en la precampaña) y el 37.2% en la campaña electoral; mientras 3% ocurrió el momento del sufragio y 10.3% en momento postelectoral.
- Por otro lado, destaca que, de acuerdo con la actividad político electoral desempeñada por las víctimas, el 33.3% se ubica como aspirantes o candidatos a un cargo de elección popular; 35.3% eran integrantes o ex integrantes del cabildo (alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros y secretario particular) y 19.9%, operadores de partidos políticos. Esto nos lleva a coincidir con la magistrada Janine Otalora, en

27 Según información publicada por Animal político y Poderopedia en Narcodata, disponible en <https://narcodata.animalpolitico.com>

28 Con base en información de *Enviromental Justice* disponible en <https://ejatlas.org/>, Cartocrítica <http://www.cartocritica.org.mx/> y fuentes hemerográficas digitales.

cuanto a que los asesinatos son reflejo de que los “criminales deciden quien llega a la boleta (electoral)”²⁹.

No puedo dejar de mencionar que estos niveles de violencia electoral no están por fuera del privilegio acordado a la economía de mercado y a la simulación democrática, aparejada a la infiltración del crimen organizado en el gobierno y la intervención extranjera en materia de seguridad nacional³⁰.

4. Conclusiones a manera de balance...

Veamos entonces, algunos aspectos básicos respecto a nuestro cuestionamiento principal: saber si hay o no cambios en la cultura política en el 2018. En principio, abordar si es pertinente el enfoque de una visión de conjunto del sistema político; luego, ponderar el efecto del contexto económico, político y social como uno de los factores del resultado electoral. Enseguida, pasar a las causas y los efectos, objetivos y subjetivos, que orientaron el voto opositor para, finalmente, responder en dónde están los cambios y sustentar de qué tipo de cambios se trata y cuál es su expectativa.

El enfoque aplicado muestra que es pertinente y necesario rebasar el ámbito del análisis que usualmente se relega al régimen político. Un acercamiento al análisis de las instituciones y de la interacción de todos los actores en el espacio público permitiría salir del ámbito restringido del análisis de la democracia procedimental, particularmente, en el caso del análisis de la cultura política y la construcción de la ciudadanía.

Los efectos del neoliberalismo en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de la población, posterior a la aplicación de las reformas estructurales del

29 Cfr. García, C. y Arrieta, C. “Criminales deciden quién llega a la boleta”, según la Magistrada Janine Otalora en El Universal, 22 de junio de 2018. Recuperado de:

<http://www.eluniversal.com.mx/estados/criminales-deciden-quien-llega-boleta>

Publicado el 22 de junio de 2018. Recuperado el 19 de octubre de 2018.

30 Me refiero al reconocimiento del narcotráfico como asunto de seguridad nacional y a los acuerdos y reformas por los que se abrió la puerta a la intervención extranjera: Plan Nacional de Desarrollo (1989), Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico (1996); la reforma constitucional al Artículo 89, Fr. VI (2004), la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005), la Iniciativa Mérida, el Plan Visión México 2030 (2006), el Programa Sectorial de Seguridad Pública (2013) y la Ley de Seguridad Interior (2017).

Pacto por México, tuvieron un indudable efecto en los resultados de las elecciones del 2018.

Las acciones de gobierno mediante los proyectos privatizadores de participación público-privada surgidas del pacto privatizador, contradijeron las promesas de campaña menguando aun más la credibilidad en el gobierno de Enrique Peña, desacreditando mayormente a los partidos firmantes del Pacto por México. Particularmente, porque el gobierno saliente representa el pináculo del autoritarismo, la corrupción y la impunidad con las cuales procedieron los cinco gobiernos federales anteriores para impulsar los procesos de privatizaciones.

Los saldos del contexto económico, social y político que deja el modelo neoliberal producen efectos de carácter objetivo y subjetivo, tales como el desempleo, el encarecimiento de la vida y la pérdida de la capacidad adquisitiva, así como la desconfianza, la inseguridad, el miedo; sumados, contribuyen en la construcción del imaginario colectivo hacia la percepción de hartazgo, desaliento, fastidio y rechazo masivo al sistema político. Un sistema que apostó todo a la economía de mercado y a la simulación democrática.

La violencia descontrolada inducida por el segundo gobierno de la alternancia en la presidencia de la república, mediante la declaración de guerra al narcotráfico y la incorporación del ejército en tareas policiacas, forma parte de los saldos de gobiernos débiles, sin legitimidad política ni suficiente representatividad social, porque surgieron de fraudes electorales, ante la falta de contrapesos de los poderes del Estado. La fallida guerra contra el narco dio paso a la cooptación de autoridades en los distintos niveles de gobierno, que ahora incursionan y se diseminan en el conjunto del sistema político. De modo que el crimen organizado ahora decide quién le conviene en los puestos de elección popular mediante asesinatos, una práctica de violencia política ejercida también por gobernantes en la defensa de la relación entre poder y negocios.

Las prácticas culturales político electorales, como hemos expuesto, no cambiaron en las elecciones del 2018; lo que sí cambió fue la correlación de fuerzas y la actitud resiliente de los votantes, quienes lograron superar la compra y coacción del voto, las campañas negras y el control corporativo y clientelar con una votación masiva, que hizo incontestable el resultado electoral. Pesaron más los agravios, así como las promesas de campaña del ganador en el imaginario colectivo. El contexto es diferente, pero tiene la misma cultura política pragmática con la cual se accedió a la candidatura presidencial, tenemos también al mismo sistema de partidos, que no colapsó, simplemente intercambió lugares, mantuvo sus funciones.

En fin, cabe preguntarse si se puede cambiar el régimen político y la calidad de la democracia. Sí, pero a condición de cambiar los significados dominantes de la cultura política. Cómo hacerlo, sería posible transformando la participación masiva de electores agraviados por la participación masiva con base en la construcción de ciudadanía. Por último, no puedo dejar de mencionar la declaración del presidente del INE, Lorenzo Córdova, en su intervención por la presentación del Informe Nacional Democracia sin pobreza en donde señaló:

“Queremos mejorar la calidad de nuestra democracia, queremos mejorar la calidad de nuestras elecciones, eso no pasa por una reforma electoral, pasa por atender estos problemas (corrupción, impunidad, violencia) que lastiman a la sociedad e inevitablemente lesionan todos los ámbitos de la convivencia pública, democrática, incluida la electoral, por supuesto”³¹

31 INE (2018). Intervención de Lorenzo Córdova en la presentación del Informe Nacional Democracia sin Pobreza, ciudad de México, Central Electoral, 27 de agosto de 2018. Disponible en <https://centralectoral.ine.mx/2018/08/27/intervencion-de-lorenzo-cordova-en-la-presentacion-del-informe-nacional-democracia-sin-pobreza/>

Bibliografía

Barbé, Esther. (2017), Relaciones Internacionales. Madrid, Tecnos, pp 159-160.

Castillo, J. (2012), “Las elecciones del 2012 y sus repercusiones en el desarrollo democrático de México”. Conferencia magistral para el Seminario de Análisis Político de la Academia de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEH).

_____. (2013), “Prácticas político culturales en partidos y elecciones” en Revista Mexicana de Estudios Electorales. SOME No. 12, julio 2013, ciudad de México. pp 118-150.

_____. 2016, “La relación entre el poder político y los negocios: origen de la perversión de la política y la democracia”, Ponencia para el XXVII Congreso Nacional de Estudios electorales, noviembre de 2016, Guanajuato.

Echarri, C. 2017. Propuesta de un índice para medir, y analizar la violencia en México en apoyo al trabajo legislativo. Cuadernos de Investigación, Senado de la República. Recuperado en agosto de 2018 de: <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3353>

INEGI. (2018), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 Principales Resultados. 25 de septiembre de 2018. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf

López Fernández, M. (2009), “El Concepto de Anomia de Durkheim y las Aportaciones Teóricas Posteriores” en Iberoforum, núm IV (Julio-diciembre), ciudad de México, Universidad Iberoamericana. Recuperado el 23 de agosto de 2018 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211014822005>

Navarrete y Espinosa (2017), Morena en las elecciones federales de 2015, Estudios Políticos, enero-abril de 2017, ciudad de México, UNAM. Recuperado el 28 de agosto de 2018 de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162017000100071#fn4

Puig, C. (2015), “Ricardo Anaya, las tentaciones de la suerte” en Nexos, 21 de junio de 2018. Recuperado de: <https://www.nexos.com.mx/?p=38068>

Rodríguez y Veloz. (2015), Linchamientos en México: Recuento de un periodo largo (1988-2014), El cotidiano en línea, no. 187, ciudad de México, UAM, pp 53. Recuperado el 15 de agosto de 2018: <http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf>

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018), Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017. Ciudad de México, Centro Nacional de Investigación. Recuperado de

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20se%20cuestro%20etc/HDSECEXTRV_122017.pdf

Tejera Gaona, Héctor. (2009), *Cultura política y Democracia en México*, Ponencia presentada en III Congreso Internacional de la SOME, Salamanca España, 28 de octubre de 2009.

_____. (2009), *Prácticas políticas, imaginarios y ciudadanía: disonancias entre cultura y democracia en la ciudad de México*, *Revista Mexicana de Sociología* 71, núm. 2 abril-junio, México, UNAM, pp 247-285

Woldenberg, José. (2018), “Elecciones presidenciales 2018, malestar, hartazgo y desconfianza” en *Resonancias*, 17 de mayo de 2018, México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. Recuperado el 22 de agosto de 2018 de <https://www.iis.unam.mx/blog/elecciones-presidenciales-2018-malestar-hartazgo-y-desconfianza/>